

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR

Medellín

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ALBA DEYSI LOPERA VÁZQUEZ
DEMANDADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
PROCEDENCIA	JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-005-2021-00253-01
SEGUNDA INSTANCIA	CONSULTA
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de jubilación CCT 2001-2004 / ISS
DECISIÓN	MODIFICA

SENTENCIA No. 267

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N° 038 de 2023, se procede a dictar SENTENCIA en orden a resolver el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, respecto de la Sentencia del 3 de agosto de 2022, proferida por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

ANTECEDENTES

La señora **ALBA DEYSI LOPERA VÁZQUEZ** presentó demanda ordinaria laboral en contra de la **UGPP**, con el fin de que: **1)** Se declare que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo celebrada entre ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, y en consecuencia se reconozca y pague la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 del citado convenio colectivo, a partir del 1 de noviembre de 2015. **2)** Así mismo, solicitó condenar a la pasiva al pago indexado de las sumas resultantes.

Sustentó sus pretensiones en que, nació el 1 de noviembre de 1965, vinculándose mediante contrato a término indefinido al Instituto de Seguros Sociales, ejerciendo labores de “*Profesional Universitario*” desde el 28 de septiembre de 1994 hasta el 30 de marzo de 2015.

Que el 31 de octubre de 2001 el ISS suscribió con el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL, Convención Colectiva de Trabajo para la vigencia 2001-2004, donde se estableció en el artículo 98 un régimen pensional más ventajoso que el legal. En ese sentido, precisó que para la época en que finalizó su vinculación a la entidad, que coincidió con la terminación del

proceso de liquidación del Instituto, ordenado en Decreto 2013 de 2012, la convención descrita se encontraba vigente.

En ese sentido, expuso que cumplió las exigencias contempladas en la CCT para acceder a la prestación, como quiera que alcanzó la edad de 50 años y completó más de 20 años al servicio del ISS, motivos que le llevaron a solicitar a la **UGPP** la prestación convencional, por ser este ente el que asumió las obligaciones pensionales del Instituto, petición negada por la demandada en *Resolución RDP 042480 del 9 de noviembre de 2016*.

Luego, afirmó que el 27 de noviembre de 2020 presentó una nueva solicitud ante la demandante en el mismo sentido, de la que adujo, no recibió respuesta (f. 1 a 11 Archivo 03 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **UGPP** dio respuesta al gestor oponiéndose a las pretensiones de la demanda, manifestando, en síntesis, que, pese a lo establecido en la CCT, conforme los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005, y Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, los requisitos pensionales contemplados en la convención debían acreditarse antes del 31 de julio de 2010, situación que no ocurrió con la demandante. En consecuencia, la entidad formuló las excepciones de: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; COMPENSACIÓN; PRESCRIPCIÓN e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS* (...)” (f. 4 a 11 Archivo 09 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, mediante Sentencia del 3 de agosto de 2022, el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dispuso lo siguiente:

“(…) **PRIMERO:** DECLARAR que a la señora ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ con la C.C. 43.096.323 le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, conforme el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 suscrita entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) a pagar a la señora ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ la pensión de jubilación convencional establecida en la cláusula 98 de la Convención Colectiva 2001-2004, suscrita entre el SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, al acreditar cumplir con las exigencias establecidas en la citada convención, según lo expresado en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) a pagar a la señora ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ con la C.C. 43.096.323 la suma de \$221.859.751, a título de retroactivo pensional de jubilación liquidado desde el 27 de NOVIEMBRE de 2017 hasta el 31 de mayo de 2022. A partir del 1 de junio de 2022, la UGPP continuará pagando a la demandante una pensión de jubilación equivalente a la suma de \$4.094.519, la cual se incrementará conforme los criterios legales, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre de cada año y sobre la cual operan los descuentos para salud; la cual pagará hasta que la prestación sea compartida con la eventual pensión legal de vejez, en caso de ser compatible, tal y como se expresó en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) a pagar a la señora ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ con la C.C. 43.096.323 la indexación de las condenas, según la fórmula y directrices expuestas en la motivación.

QUINTO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 27 de noviembre de 2017. Las demás excepciones de mérito propuestas por las demandadas se declaran improbadas (...)”.

Gravó en costas a la **UGPP**.

Como argumentos de su decisión, el *A quo* comenzó reseñando la evolución normativa en torno a la negociación colectiva y la posibilidad de acordar entre empleadores y organizaciones sindicales mejoras en punto a las prestaciones y prebendas de los trabajadores, entre estas, las pensionales. No obstante, explicó el contexto factico y exposición de motivos del Acto Legislativo 01 de 2005 que obligaba a la modificación de las condiciones pensionales a través de este, con el objetivo de lograr la sostenibilidad y equidad del sistema (C-258 de 2013).

En ese sentido, expuso que, a través de la reforma en comento, se puso un límite en cuanto a la negociación colectiva de derechos pensionales más favorables a aquellos indicados en el régimen legal; y a su vez, su contenido contempló límites para aquellas convenciones que estuviesen rigiendo a la entrada en vigencia de dicho acto, determinando que lo establecido allí continuaría hasta la vigencia pactada.

En contraste con lo antelado, indicó lo reglado en el artículo 98 CCT 2001-2004 del ISS, a efectos de resaltar que las condiciones precisadas en este, puntualmente el tiempo de servicios, debe cumplirse en la calidad de trabajador oficial. Aseveró que, por un tiempo, los despachos judiciales, incluida la Sala de Casación Laboral de la CSJ, efectuaron una interpretación restringida de los efectos del Acto Legislativo sobre la disposición convencional estudiada, pensamiento que comenzó a modificarse en Sentencia SU-555 de 2014 que recordó el respeto a las circunstancias pensionales fijadas en CCT hasta la vigencia acordada, y que se consolidó en la Jurisdicción Ordinaria, por ejemplo, en Sentencias SL2543-2020, SL2798-2020, SL2986-2020 y SL3635-2020, donde la Corte aclaró la hermenéutica de los efectos del Acto referido, para decir que, las previsiones pensionales de la convención del ISS se extienden hasta el año 2017.

A partir de lo expuesto precisó que, en el caso de la demandante, aquella laboró al servicio del ISS entre 1994 y 2015, es decir, por más de 20 años, y por su condición de trabajadora oficial de la entidad, podía beneficiarse de la Convención Colectiva 2001-2004, alcanzando la edad de 50 años el 1 de noviembre de 2015, todo lo cual le permitía acceder a la pensión de jubilación reclamada, con derecho a 13 mesadas anuales.

Sobre la efectividad de la prestación, argumentó que operó la prescripción para las mesadas generadas antes del 27 de noviembre de 2017, al tener en consideración la segunda reclamación pensional radicada el 27 de noviembre de 2020, conforme lo dispuesto en los artículos 488 CST y 151 CPLSS. En ese sentido, indicó que al realizar el cálculo de la mesada para 2015, arrojó la suma de \$3.031.021, arrojando como retroactivo causado hasta el 31 de mayo de 2022 la suma de \$221.859.751, que deberá pagarse de manera indexada.

GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Si bien el apoderado judicial de la **UGPP** presentó recurso de apelación en contra de la sentencia, remitido el proceso a esta instancia con el objetivo de resolver esta inconformidad, mediante escrito remitido al correo de la Secretaría de la Sala el 24 de agosto de 2023, la apoderada judicial de la entidad decidió desistir de la alzada propuesta, determinación para la cual contó con la autorización expresa de la Directora Jurídica de la entidad (Archivo 05 ED). En ese sentido, por ajustarse a lo previsto en el artículo 316 CGP, es procedente **ADMITIR** dicho desistimiento, lo que se entiende atendido en decisión interlocutoria dentro de este mismo proveído, por economía procesal.

Ante esa circunstancia, el asunto se estudiará en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, conforme lo dispone el artículo 69 del CPT y SS.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término otorgado, el apoderado judicial de la parte **DEMANDANTE** presentó alegatos de conclusión, reiterando la postura expuesta en la demanda en torno al contenido de la CCT que rigió al interior del ISS entre 2001-2004, la aplicabilidad a su caso de lo consagrado en materia pensional, argumentos que amplió con lo dicho por la Jurisprudencia Especializada Laboral y de la Corte Constitucional, solicitando la confirmación de la Sentencia de primera instancia (Archivo 04 Tribunal).

A su turno, la mandataria de la **UGPP** insistió en sus alegaciones sobre la vigencia de la convención colectiva descrita, y que, en todo caso, si el contenido de este acuerdo, incluido lo atinente al artículo 98, se prorrogó, ello solo ocurrió hasta el 31 de julio de 2010, por los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005.

Así mismo, esbozó que ambos requisitos exigidos para la jubilación, es decir, tiempo de servicios y edad, son exigencias de causación, y debieron acreditarse antes de la fecha referida, posición sustentada en varias decisiones de la Sala de Casación Laboral de la CSJ. En ese sentido, reiteró lo dicho en la contestación, en dirección a que la demandante no cumplió con los requisitos antes de la calenda descrita por lo que en su caso únicamente tenía una mera expectativa (Archivo 03 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a establecer, si en aplicación de la CCT 2001-2004 celebrada entre el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, la señora **ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ** tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que reclama.

En caso positivo, se validará la efectividad de la prestación, su cuantía y si operó la prescripción.

Se procede entonces a resolver los planteamientos, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se destaca que no es materia de debate dentro del presente asunto:

- (i) Que la señora **ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ** nació 1 de noviembre de 1965, según se desprende de la copia del Registro Civil de Nacimiento visible a folio 14 Archivo 03 ED.
- (ii) Que la demandante prestó sus servicios al Instituto de los Seguros Sociales como trabajadora oficial en los siguientes periodos (f. 25 a 30 Archivo 03 ED):

EMPLEADOR	PERIODOS (DD/MM/AA)		DÍAS DEL
	DESDE	HASTA	PERIODO
ISS	28/09/1994	27/09/1995	365
ISS	10/10/1995	9/10/1996	366
ISS	17/10/1996	16/07/1997	273

ISS	17/07/1997	31/03/2015	6.467
TOTAL DÍAS LABORADOS			7.471
TOTAL AÑOS LABORADOS			20,8

- (iii) Que el extinto Instituto de los Seguros Sociales y el sindicato de trabajo SINTRASEGURIDAD SOCIAL, suscribieron convención colectiva de trabajo con vigencia 2001 – 2004 (f. 41 a 109 Archivo 03 ED), que cuenta con la respectiva nota de depósito (f. 41 a 109 Archivo 03 ED ED).
- (iv) Que el 8 de julio de 2016, la señora **LOPERA VÁSQUEZ** solicitó a la **UGPP** el reconocimiento de la pensión convencional consagrada en el artículo 98 de la CCT 2001-2004, petición negada por la entidad mediante resolución RDP 042480 del 9 de noviembre de 2016, tras argumentar que el solicitante no cumplió los requisitos reglados en el citado texto convencional antes del 31 de julio de 2010 (f. 34 a 36 Archivo 03 ED).

DE LA PENSIÓN CONVENCIONAL

Teniendo en cuenta el derecho en disputa, lo primero a resaltar es que la parte activa aportó copia de la convención colectiva (CCT) 2001-2004 suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, que se allegó con su respectiva nota de depósito (f. 41 a 109 Archivo 03 ED ED). En consecuencia, tiene pleno valor probatorio lo establecido allí, tal como de vieja data lo dispuso la Corte Suprema de Justicia (SL Rad. 16505 de 25 de octubre de 2001, reiterado en sentencia SL378-2018).

Así mismo, es menester poner de presente que para el año 2005, la citada CCT se encontraba vigente, por cuanto no se aportó evidencia de su denuncia, conforme a lo dispuesto en el artículo 478 del CST, el cual determina que las convenciones colectivas de trabajo se prorrogan automáticamente si dentro de los 60 días anteriores a su vencimiento, las partes no han realizado manifestación expresa de su intención de darla por terminada.

Ahora, la solución asumida para el conflicto por el Juez de primera instancia, se orientó hacia la procedencia del derecho jubilatorio de índole convencional reclamado en la demanda, fundamentada en lo señalado la Jurisprudencia Especializada Laboral para casos análogos, concluyendo entonces que la demandante era beneficiaria de la mentada convención colectiva, y que, a su vez, tenía cumplidas las exigencias regladas en el artículo 98 CCT, para acceder a la pensión descrita, ello desde el 6 de junio de 2020.

Puestas de ese modo las cosas, lo primero a resaltar por la Sala es que, en efecto, el artículo 98 CCT establece el derecho a la pensión de jubilación convencional para **el trabajador oficial que cumpla 20 años de servicio continuo o discontinuo al ISS, y para el caso de las mujeres, que llegue a la edad de 50 años**, disposición extralegal sobre la cual, por varios años la Jurisprudencia Laboral, como lo sostuvo a lo largo de su defensa la entidad accionada, consideró su limitación temporal a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que los efectos de estipulaciones como la tratada, en cualquier caso solo podían materializarse hasta el 31 de julio de 2010. Por ejemplo, en Sentencia SL1292-2020, aun se predicaba lo siguiente:

“(…) En estos casos, de conformidad con el parágrafo 3° transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los árbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones más favorables a las que están en vigor a la fecha en que entró a regir el acto legislativo.

Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto. (...)”.

No obstante, como lo advirtió el Juez de primera instancia, la postura adoptada por el Alto Tribunal sobre la temática estudiada, dio un viro total a partir de la Sentencia, **SL3635-2020**, reiterada seguidamente en sentencias SL4569-2020, SL933-2021 y SL2250-2021, explicando que:

“(…) tal como se determinó en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubra un periodo superior a esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.

[...]

Esa y no otra, fue la intención del constituyente secundario al consagrar en los parágrafos transitorios 2.º y 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005, el respeto por los derechos adquiridos, sujetándolos al término inicialmente pactado por las partes hasta su extinción, incluso más allá del 31 de julio de 2010, el cual incluye las prórrogas automáticas, estas sí con límite hasta esa data, tal como lo dejó sentado la Corte en las sentencias CSJ SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020.

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto son las siguientes:

a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

De lo anterior se desprende con facilidad, que tiene consistencia el planteamiento blandido desde la demanda, como quiera que, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció un límite temporal para los beneficios pensionales, dicho mandato legal no es aplicable al artículo **98 CCT**, pues, como se dejó visto, el tema fue abordado por el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Laboral, quien al respecto concluyó que la teleología de la primera parte del *parágrafo 3º del acto legislativo 01 de 2005*, está direccionado a respetar los derechos adquiridos de las personas y la voluntad de las partes firmantes del convenio colectivo, motivo por el que, al ser las partes contrayentes del acuerdo las que dispusieron una vigencia superior a la establecida por el legislador para las condiciones pensionales diferentes a las establecidas en la Ley 100 de 1993, esta debe ser venerada por advertir allí el Alto Tribunal, la vigencia de un derecho adquirido, sometido al término inicialmente pactado por las partes hasta su extinción.

En ese orden se observa, que según lo acordado en los artículos 2º y 98, entre otros, se plantearon varias vigencias del acuerdo convencional.

Justamente, el artículo 2° CCT 2001-2004, expresa:

“(…) La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente Convención se les haya fijado una vigencia diferente (…).”

A su vez, el artículo 98 ibidem consagra la pensión de jubilación bajo las siguientes reglas:

“(…) El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:

- (i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.*
- (ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.*
- (iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio. (…).”*

Nótese entonces que el artículo 98 de la CCT 2001-2004, indica una serie de condiciones para que los trabajadores oficiales del extinto ISS puedan jubilarse, fijando unas fechas para determinar el monto de la pensión de jubilación, de las cuales puede extractarse que la intención de las partes suscriptoras del texto era amparar los derechos de los trabajadores que adquirieran el estatus de pensionado incluso más allá del año 2017, convenio que, de acuerdo con lo razonado por la Jurisprudencia, debe acatarse hasta la fecha pactada por los negociadores, ya que el legislador dentro del acto legislativo admitió su vigencia. En ese sentido lo expuso en la CSJ SL3343-2020, con el siguiente tenor:

“Es claro entonces, que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la citada cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017, en otros términos, de conformidad con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia.”

Dicha postura, se destaca, ha sido reiterada en decisiones posteriores como la SL2152-2023, SL2307-2023, por citar algunos ejemplos.

Otro aspecto a considerar respecto de la prestación convencional que nos ocupa, tiene que ver con el momento en que se entiende causada esta pensión, lo cual también ha sido definido por la jurisprudencia del órgano de cierre en laboral, en providencias como CSJ SL262-2019, CSJ SL5116-2020 y CSJ SL3343-2020, en las que esclareció que, en el caso de esta cláusula convencional, la edad constituye un requisito de exigibilidad de la pensión y no de causación:

“Al respecto, es relevante destacar que, en este caso, a la luz de la lectura de la cláusula convencional (art. 98), el derecho pensional allí consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestación es el

tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condición futura, connatural al ser humano.

[...]

Ahora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación.

Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación (...) (Negrillas fuera de texto).

Y en providencia más reciente, CSJ SL1490-2023, en un caso de similares contornos al presente, zanjó el punto la Corte, indicando:

“(...) Al respecto, se advierte que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que una correcta lectura del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 permite concluir que: (i) la pensión de jubilación allí regulada se causa únicamente con el cumplimiento de 20 años de servicios continuos o discontinuos al ISS, toda vez que la edad de 55 años si es hombre o 50 si es mujer es un simple requisito de exigibilidad, y (ii) los interlocutores sociales establecieron tales parámetros incluso «para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017», de modo que como el término inicial se acordó hasta ese año -2017-, no resultó afectado por los cambios dispuestos en el Acto Legislativo 01 de 2005 (...)”. (Negrillas fuera de texto).

En este orden de ideas, dilucidado el hecho relativo a que la pensión de jubilación estudiada, pese al límite establecido por el acto legislativo 01 de 2005, siguió vigente incluso para quienes se jubilen a partir del 2017, procede estudiar si la demandante cumple con los requisitos para tenerse como beneficiaria de la prestación, estos es, haber completado 20 años de servicio continuos o discontinuos a la entidad, momento a partir del cual deberá alcanzar la edad mínima requerida para hacer exigible el derecho, 50 años para las mujeres, precisando conforme viene anotándose, que el elemento de causación es el tiempo de servicios, mientras que la edad se erige como elemento necesario simplemente, para la exigencia del derecho.

Así entonces, encontramos que en el *sub-lite* no se discute que la demandante es beneficiaria de la convención colectiva de la cual predica su aplicación, en atención a que el artículo 3° del mentado pacto colectivo reza que, serán beneficiarios del convenio los trabajadores oficiales vinculados al Instituto de los Seguros Sociales que sean parte del sindicato de trabajo y aquellos que sin serlo no renuncien expresamente a los beneficios de esa convención, bajo esta óptica como al plenario no fue allegada ninguna documental en la que conste que la señora **ALBA DEISY LOPERA VÁSQUEZ** de manera expresa renunció a los beneficios consagrados en la convención colectiva de trabajo suscrita entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS, se debe considerar que ostenta la calidad de beneficiaria.

En lo concerniente al tiempo de servicios, basta con revisar los Certificados de Información Laboral aportados por la entidad accionada, que constatan la vinculación de la actora al Instituto de los Seguros Sociales entre el **28 de septiembre de 1994 y el 31 de marzo de 2015** (f. 21 a 23 y 30 Archivo 09 ED), a saber, por 20 años, 5 meses y 21 días, superando el requisito de tiempo de servicios estipulados en la CCT 2001-2004 de cara a la causación de

la pensión convencional, **el 28 de septiembre de 2014**, es decir, en vigor de la CCT-2001-2004.

Luego, a folio 14 del Archivo 03 ED, reposa copia del registro civil de nacimiento de la demandante, del que se desprende que su fecha de nacimiento data del **1 de noviembre de 1965**, es decir, cumplió los 50 años exigidos el mismo día y mes de 2015, teniéndose de esa manera superados los dos (2) requisitos estipulados en la CCT de cara a la *causación* y *exigibilidad* de la pensión convencional para el **1 de noviembre de 2015**, lo que le hace acreedora de la prestación deprecada, en los términos establecidos en el inciso (ii) del artículo 98, para el interregno comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016 con el *“100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio”*.

Ahora, en lo atinente a la cuantía de la pensión, se itera, debe atenderse lo dispuesto en el artículo 98 de la CCT 2001-2004 en mención, segunda condición, que preceptúa un promedio de los tres (3) últimos años de servicio, para quienes alcancen requisitos entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017, fijándose los factores de liquidación en el mismo precepto que estipula:

“Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:

- a. Asignación básica mensual*
- b. Prima de servicios y vacaciones*
- c. Auxilio de alimentación y transporte*
- d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras*
- e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados (...).”*

En cuanto a la fecha de efectividad de la pensión de jubilación, se entiende esta como la fecha de exigibilidad, esto es, el momento en que se alcanzan ambos supuestos pensionales, **edad y tiempo de servicio**, de allí que para exigir la pensión de jubilación solicitada, se requiere que el actor no solo cuente con el tiempo de servicios, 20 años, sino también con la edad mínima requerida; en ese orden, pese al cumplimiento del tiempo de servicios desde el 28 de septiembre de 2014, y que el actor continuó vinculado hasta el **31 de marzo de 2015**, solo podría acceder a la prestación el **1 de noviembre de 2015**, data en la que la señora **LOPERA VÁSQUEZ** cumplió los 50 años, edad mínima que exige el acuerdo colectivo.

De modo que, al proceder la Sala a realizar las correspondientes operaciones aritméticas (Anexo 1º), teniendo para ello los factores descritos en la Convención, se evidencia que, para el año 2015, cuando se produjo la desvinculación de la trabajadora, el 100% de lo percibido por esta durante los últimos tres (3) años de labores muestra una mesada de \$3.105.103, superior al monto liquidado en la sentencia de primera instancia -\$3.031.021-, sin lugar a modificarla como quiera que la decisión se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la **UGPP**, manteniéndose incólume el resultado de la operación aritmética efectuada en primer grado. Esta pensión se limita a 13 mesadas anuales, al haber causado su derecho después del 31 de julio de 2010, según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, como lo ordenó el Juez de instancia.

En relación con el retroactivo pensional liquidado en favor de la demandante, al estudiar la Sala el fenómeno **prescriptivo**, se tiene que el derecho se hizo exigible el 1º de noviembre de 2015, y en ese sentido, la primera reclamación presentada por la actora para obtener el pago de la pensión de jubilación la radicó ante la demandada el **8 de julio de 2016**, desatada negativamente mediante *Resolución RDP 042480 del 9 de noviembre de 2016*, siendo a partir de la notificación de este acto administrativo, esto fue, el 29 de noviembre de 2016 (f. 45 Archivo 09 ED), que contaba la accionante con el periodo de tres (3) años para presentar la demanda, y obtener la interrupción de la prescripción con la petición reseñada.

Sin embargo, se advierte que no acudió la actora en el término señalado, procediendo

a presentar una nueva reclamación pensional el 27 de noviembre de 2020 (f. 19 a 23 Archivo 03 ED), la que no tiene la entidad de interrumpir nuevamente el término de prescripción, el que al tenor de los preceptos legales opera por un sola vez (Art. 151 CPLSS y 488 CST), postura reiterada de tiempo atrás por el Órgano de Cierre en lo Laboral (CJS SL1155-2023, SL373-2023, entre otras), en virtud de lo cual la prescripción solo vino a interrumpirse con la presentación de la demanda

En ese sentido, teniendo como punto de partida que la demanda originaria del presente proceso fue presentada el **21 de junio de 2021**, de allí se colige que están afectadas por prescripción las mesadas causadas antes del **21 de junio de 2018**, por lo que habrá de modificarse la decisión de primer grado en este aspecto, y su incidencia a la hora de liquidar las mesadas adeudadas.

En ese orden de ideas, teniendo como base la mesada calculada en primera instancia, actualizada debidamente al 2018, se encuentra que el retroactivo causado desde el 21 de junio de 2018, actualizado por virtud de lo dispuesto en el artículo 283 CGP, al 30 de septiembre de 2023, asciende a **\$268.814.300**, suma de la cual está autorizada la entidad accionada para descontar lo correspondiente por aportes al SGSSS, como bien lo ordenó el Juez de instancia.

DESDE	HASTA	VARIACION	MESADAS ADEUDADAS	VALOR MESADA CALCULADA	RETROACTIVO
21/06/2018	31/12/2018	0,0318	7,33	\$ 3.562.276	\$ 26.123.357,80
1/01/2019	31/12/2019	0,0380	13,00	\$ 3.675.556	\$ 47.782.233,74
1/01/2020	31/12/2020	0,0161	13,00	\$ 3.815.228	\$ 49.597.958,63
1/01/2021	31/12/2021	0,0562	13,00	\$ 3.876.653	\$ 50.396.485,76
1/01/2022	31/12/2022	0,1312	13,00	\$ 4.094.521	\$ 53.228.768,26
1/01/2023	30/09/2023		9,00	\$ 4.631.722	\$ 41.685.495,69
TOTAL RETROACTIVO					\$ 268.814.300

A partir del 1 de octubre de 2023, la **UGPP** deberá continuar pagando como mesada la suma de **\$4.631.722**, haciéndose la salvedad que, llegado el momento, de conformidad con lo consagrado en la CCT 2001-2004 génesis del derecho pensional, esta prestación es incompatible con la que posteriormente asuma el sistema general de pensiones común.

Comparte esta Corporación lo decidido por el Juez de primer grado, en punto a ordenar el pago indexado de los montos adeudados, en la medida que las sumas descritas fueron afectadas por la devaluación de la moneda derivada del paso del tiempo.

Corolario de lo expuesto se modificarán los numerales TERCERO y QUINTO de la sentencia consultada, en el sentido de precisar el momento desde el cual operó la prescripción, así como el monto del retroactivo de mesadas adeudado a la actora, confirmándose en lo demás. Sin costas en esta instancia por haberse conocido en el grado de consulta.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia resuelve en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales **TERCERO** y **QUINTO** de la Sentencia del 3 de agosto de 2022, proferida por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el sentido de:


- **PRECISAR** que están afectadas por prescripción las mesadas pensionales causadas con anterioridad al **21 de junio de 2018**.
- En consecuencia, el **RETROACTIVO** de mesadas adeudado a la demandante y a cargo de la **UGPP**, generado desde el 21 de junio de 2018, y actualizado hasta el 30 de septiembre de 2023, asciende a la suma de **\$268.814.300**. A partir del 1 de octubre de 2023, la mesada en favor del accionante asciende a la suma de **\$4.631.722**. Se confirman en lo demás estos numerales.


SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia consultada.

TERCERO: Sin COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA